

Puede producir cáncer en varios órganos

Uno de cada diez argentinos toma agua contaminada con arsénico

A pesar de las alertas de la Organización Mundial de la Salud, las autoridades no solucionan el problema. Los científicos involucrados dicen: “hacemos lo que podemos”. Sin embargo, hay alternativas económicas y sencillas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es contundente: el arsénico genera cáncer en varios órganos si su proporción en agua es mayor a 0,01 mg/l. En la Argentina hay zonas, como la del Chaco, donde puede llegar a 0,85. Es decir, el 850% más. Por eso se estima que en dos años se multiplicarán los 4 millones de habitantes en riesgo de contraer algún tipo de enfermedad vinculada con el consumo de agua contaminada con arsénico.

En 2007, la Argentina se comprometió a reducir el nivel de este veneno (de 0,05 a 0,01 mg/l) antes de 2012. Sin embargo, cuando faltan menos de dos años para llegar a esa fecha, se evidencian medidas aisladas, más vinculadas a la presión de los vecinos que a la eficacia gubernamental: las estadísticas nacionales están desactualizadas, mientras que el único programa provincial existente (Santiago del Estero) dejó de percibir recursos de Nación y, de los 252 aljibes que debían construirse, sólo se hicieron 79. “Hay pruebas abrumadoras, de estudios epidemiológicos, de que el arsénico está relacionado causalmente con el desarrollo de cáncer en particular en la piel, la vejiga y los pulmones”, indica la OMS en su capítulo sobre las enfermedades derivadas del Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE).

La Argentina está considerada como uno de los países con mayor presencia de arsénico, al igual que los Estados Unidos, México, Chile, India, Bangladesh, China y Tailandia. Eso obedece a que este componente químico permanece depositado desde hace millones de años en el agua: “Se da naturalmente por la disolución de rocas volcánicas, y está en la composición biológica”, explicó a Tiempo Argentino, la doctora Marta Litter, gerenta química del Centro Atómico Constituyentes, de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

De 2006 a 2009, Litter coordinó el proyecto Iberoarsen –conformado por 46 grupos de 17 países americanos, Portugal y España– desde el cual se articularon acciones conjuntas para establecer la distribución geográfica y geológica del arsénico, además de recomendar diferentes tecnologías económicas de remoción. “El dinero no alcanzaba para mucho más que eso. Sacamos dos libros, y faltan dos más que están en imprenta. Hicimos lo que pudimos, encontramos muy poca respuesta”, argumentó. La red Iberoarsen es financiada por el programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CyTED) con aportes de los ministerios de Ciencia y Tecnología de cada país, pero algunos científicos argentinos dudan sobre su participación en los encuentros programados para este año.

El HACRE “es una enfermedad cuyos síntomas aparecen muy tarde, a los 10 o 15 años de exposición”, indicó Edda Villaamil, profesora de Toxicología y Química Legal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Buenos Aires. La docente, que trabajó en varias zonas afectadas del interior, detalló que, por lo general, ese malestar “se manifiesta en hinchazón en las manos y plantas de los pies, aumento de callosidades y manchas en la piel en lugares del cuerpo que no están expuestos a la luz solar”. A esto se suma que los cuadros clínicos son muy difíciles de detectar porque la mayoría de los afectados son trabajadores rurales, viven en poblaciones aisladas y en pésimas condiciones sanitarias. “Sus callos pasan desapercibidos a causa de su

actividad, y cuando comienzan los tratamientos ya es demasiado tarde”, agregó Villaamil.

Y la situación es aun peor: no se cuenta con registros. “No hay datos. No es una patología para la que estén preparados todos los médicos”, reveló la docente. “En general las muertes se deben a paro cardíaco y si ha habido otra patología, no está descrita. Todo el mundo termina muriendo porque se le para el corazón, pero no se puede hacer una relación entre enfermedad y mortandad”, explicó Villaamil.

Juan Carlos Martínez y María de los Ángeles Ruiz (ver ambas fotos) lo viven en carne propia: son dos de los tres enfermos “legales” de HACER de Pehuajó. El hombre lleva sus uñas en una bolsita blanca de nylon porque se le fueron cayendo. Ella no deja de temblar, como les pasa a los perros envenenados, dice. Los dos fueron diagnosticados con polineuropatía –enfermedad que deshilacha los nervios– y cobran una pensión de \$ 626 por una discapacidad que afecta al 80% de su cuerpo.

Las estadísticas que maneja la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAD) establecen que hay 2.493.477 personas con “riesgo potencial, de acuerdo a concentraciones de 0,05 mg/l de arsénico en agua”, en 12 provincias (ver infografía). Sin embargo, los diversos especialistas que trabajan en el tema coinciden que la cifra superaría sin duda los 4 millones de habitantes, porque en ese cómputo no fueron incluidas las provincias de Buenos Aires, La Rioja y Río Negro.

Además, los únicos números concretos son de hace cinco años, cuando la Asociación Toxicológica Argentina coordinó diferentes grupos de universidades y organismos de investigación. Desde la Unidad de Investigación y Desarrollo Ambiental de la SAD aseguraron a este diario que el HACRE no está en la agenda de la gestión de Homero Bibiloni, secretario del área. Lo que ocurre en Santiago del Estero es una prueba, aseguran.

Esta provincia declaró la emergencia social y tiene la obligación de registrar a los afectados en el Programa Provincial HACRE. Miguel Gómez, coordinador de la Oficina del Agua de la SAD, puntualizó que es el único convenio firmado por el Estado Nacional para resolver la problemática, “pero cada provincia tiene su sistema de provisión de agua y debe verificar su calidad”.

Uno de los impulsores de la medida fue el pediatra Carlos Padial, que vive en Clodomira –un pueblo con alrededor de 10 mil habitantes– y trabaja en el departamento de La Banda desde hace más de 20 años. Detectó HACRE en más de 150 pacientes, de los cuales 12 fallecieron.

Al principio fue duro: “no recibí ningún apoyo, y el gobierno juarista ni siquiera quería recibirme las muestras de agua. Fui perseguido por el juarismo por intentar prevenir y denunciar este problema, que no origina votos ni negocios.”

En diciembre de 2007 se firmó un convenio: el Estado Nacional se comprometía a enviar fondos para construir 252 aljibes. Es un método efectivo para recoger agua de lluvia –libre de arsénico– y luego utilizarla para beber o cocinar. Pero sólo se hicieron 79. “No se han recibido los fondos para terminar, lo que crea un notable grado de frustración en las comunidades”, acusó Gladis Paredes, coordinadora del programa santiagueño. Durante la gestión de Romina Picolotti en Medio Ambiente, la provincia recibió una computadora y una camioneta para recorrer las zonas. Y se identificaron 455 casos y 18 muertos, aunque sólo otorgaron dos pensiones: las recibieron una mujer a la que le amputaron las manos y una nena con hidroarsenicismo muy avanzado.

En la provincia de Buenos Aires, la situación es similar. Muchos vecinos del interior empezaron a tomar conciencia de qué tipo de agua bebían a partir de un estudio realizado en 2005 por la Universidad Nacional La Plata. Este último comprobó que unas 30 localidades estaban por encima de las cifras permitidas. Si bien cuentan con más del

90% de cobertura de agua potable de red, diversos estudios indican que está contaminada.

Lo que ocurre en Carlos Casares no deja de asombrar. El ex intendente y actual senador provincial Omar Foglia había denunciado en 2005 la contaminación del agua ante el defensor del Pueblo de la Nación. Se inauguró una planta potabilizadora, pero nunca funcionó a pleno y aún hoy distribuye agua contaminada.

La planta debía tener cinco celdas, pero falta la última. Se trata del sedimentador que contendría el grueso del arsénico para que el agua después pase por los diferentes filtros, que se saturaron poco después de ponerse en funcionamiento.

“Somos optimistas y a la vez cautelosos, porque ABSA nos dio muchos dolores de cabeza”, sentenció Pedro Mayola, integrante de la comisión de vecinos de Casares. La empresa estatal gastó en la primera etapa unos 3 millones de pesos, y para las obras complementarias se prevén 5 millones más. Voceros de ABSA no lograron confirmar a este diario la fecha de finalización de las obras.

“En todos los organismos nos dicen que no hay plata, pero por año los vecinos gastamos en agua mineral el dinero equivalente a la construcción de tres plantas de agua potable”, asegura Mayola. Su ecuación es la siguiente: entre las tres ciudades rondan los cien mil habitantes. Si la mitad de la población compra bidones de agua de veinte litros a 13 pesos, a razón de dos litros diarios por persona, la cifra ascendería a los 23 millones de pesos anuales.

Por su parte, José Bucca, médico y diputado provincial del Frente para la Victoria, detectó en Bolívar decenas de casos que pueden estar directamente relacionados con el HACRE. Presentó un proyecto de ley para que se cree un fondo provincial para el abatimiento de arsénico y otros elementos contaminantes.

Pero todavía no tuvo ninguna respuesta concreta. Su proyecto aguarda, paciente. Como los enfermos.